

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Política social post 2001. Integración y disciplinamiento de la acción política autónoma del movimiento de trabajadores desocupades¹

Post 2001 social policy. Integration and discipline of the autonomous political action of the unemployed workers' movement

Carolina Mamblona* GEPCO /FTS-UNLP, UNICEN
cmamblona@yahoo.com.ar

Jorgelina Matusevicius** UBA
jormatusevicius@gmail.com

¹ Se toma la decisión de utilizar la “e”, para nombrar sujetos colectivos, buscando no invisibilizar identidades desde una escritura solo centrada en binarismos sexo-genéricos. Se retoman recomendaciones de la “Guía para un lenguaje no sexista” del Cin (2021) y de la “Guía para una comunicación con perspectiva de género, (Re) nombrar”, del Ministerio de las mujeres, géneros y diversidades (2021).

* **Jorgelina Matusevicius**: Docente de la materia "Poder y Control Social" de la Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Trabajadora Social en el Centro de Salud y Acción Comunitaria N° 16 dependiente del Hospital Penna, Ciudad de Buenos Aires. Miembro de la Mesa Ejecutiva de la Asociación Gremial Docente de la UBA. Integrante de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Trabajadoras Sociales de la Ciudad de Buenos Aires. Autora de “Intervención profesional en tiempos de precarización laboral. Contrapoder instituyente y articulación con movimientos sociales”. Coautora junto con Ofelia Musacchio de “Movimientos sociales y respuesta estatal en la Argentina post 2001” y compiladora junto con Carolina Mamblona del libro “Luchas sociales, sujetos colectivos y trabajo social en América Latina”

** **Carolina Mamblona**. Directora del GEPCO: Grupo de estudios de procesos colectivos de la FTS-UNLP (LIMSycV-UNLP). Profesora adjunta en: FTS-UNLP (La Plata); Facultad de Ciencias Humanas UNICEN, (Tandil); Docente en el Seminario de Maestría “Trabajo, Cuestión Social y Vida Cotidiana” - FCH – UNICEN – (Tandil). Profesora asociada IUNMA. (Instituto universitario Madres de plaza de mayo) Integrante del NICSE, FCH-UNICEN. Compiladora junto con Jorgelina Matusevicius del libro “Luchas sociales, sujetos colectivos y trabajo social en América Latina” (2019). Integrante de la comisión de ética y derechos humanos del CATSPBA.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

RESUMEN

En este trabajo se analiza, por un lado, el impacto de la política social en la respuesta estatal a la lucha de los movimientos de trabajadores desocupados y su contraparte ligada a la integración o asimilación de una parte del movimiento al aparato de Estado. Por otro lado, se explora la persistencia de un núcleo duro de aquel primer ciclo de impugnación al neoliberalismo ligado a la crisis de representación del sistema institucional que configuró la protesta social con un componente importante de auto organización y autonomía. El fin último es identificar cuánto persiste de ese rasgo y cómo se articula con un proyecto político anticapitalista.

Palabras clave

organización, colectivización, lucha, autonomía

ABSTRACT

This work analyzes, on the one hand, the impact of social policy on the state response to the struggle of the unemployed workers' movements and its counterpart linked to the integration or assimilation of part of the movement to the state apparatus. On the other hand, we explore the persistence of a hard core of that first cycle of objection to neoliberalism linked to the crisis of representation of the institutional system that configured social protest with an important component of self-organization and autonomy. The ultimate aim is to identify how much of that feature persists and how it is articulated with an anti-capitalist political project.

Keywords

organization, collectivization, struggle, autonomy

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Introducción

La Argentina actual enfrenta una crisis profunda en la que confluyen diversos factores como el endeudamiento externo, la persistencia de la inflación, la pandemia por COVID-19, la precarización laboral y el aumento de la pobreza. La clase trabajadora sufre, de múltiples formas y estrategias, el deterioro de las condiciones materiales de vida y las dificultades de reproducción. Los movimientos y organizaciones sociales y políticas que surgieron de las luchas en el primer ciclo de impugnación al neoliberalismo continúan constituyendo un sujeto colectivo clave e ineludible para el diseño de la política social del Poder Ejecutivo, en sus distintos niveles. La conquista de cierta institucionalidad y representación, la capacidad de movilización y de lucha y la diversidad del repertorio de acciones colectivas, lo constituyen en un sector de peso en la disputa redistributiva que se da en el marco del Estado.

Esta acumulación social y política del sector de trabajadores desocupados y precarizados ha atravesado distintos momentos a lo largo de los últimos 20 años, desde aquel levantamiento popular en 2001. Sin perder su protagonismo político, aunque reconfigurándolo a partir de la modificación de la respuesta estatal, este sector de la clase trabajadora sigue librando batallas importantes en pos de su reproducción social y en la búsqueda de alternativas dentro del conjunto de las luchas subalternas.

Breve caracterización de la protesta social en la crisis del 2001

Previo a la crisis del 2001, la clase trabajadora venía enfrentando tres formas de disciplinamiento para implementar la reestructuración productiva en la Argentina. Las mismas tuvieron como base la desaparición forzada de una generación militante, de activistas sindicales obreros y estudiantes llevada a cabo por la última dictadura

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

cívico-militar (1976-1983), continuaron con la hiperinflación del 89' y la inestabilidad que generó, y se consolidó con la desocupación como amenaza y la concreción, para una parte importante de la población obrera (pasando a ser sobrante), de la desocupación, arrojando a la baja a muchas conquistas logradas por el movimiento obrero (Piva, 2009).

La inflexión en la relación de fuerzas en 1989-1990 sobre la base de la amenaza hiperinflacionaria, su consolidación con la emergencia de un consenso en torno al programa neoconservador de salida de la crisis y la cristalización de este consenso en el apoyo a la 'estabilidad' a partir del lanzamiento de la convertibilidad en abril de 1991, posibilitaron la ofensiva del capital entre 1992 y 1995, que transformó radicalmente el modo de la acumulación y su corazón: las formas concretas de explotación de la fuerza de trabajo. A su vez, esta transformación de las formas de explotación y de las condiciones de acumulación de capital completó la coerción hiperinflacionaria con la amenaza del desempleo y la fragmentación de la clase obrera, lo que indujo a la aceptación de la ofensiva del capital en los lugares de trabajo. (Piva, 2009: 22)

Todas estas reformas que tuvieron como corolario la reducción de obreros ocupados en términos relativos y absolutos, y su metamorfosis en población sobrante para las necesidades del capital, se constituyeron en un límite objetivo a la lucha de los trabajadores. A esto se sumó la acción de burocracias sindicales que, en algunas ramas de actividad, fueron la contraparte de las privatizaciones y detractores de los derechos de los trabajadores, en su afán de perpetuarse y mantener el control del conflicto. Sin embargo, la persistencia de las luchas obreras, y en particular la "novedad" del sector de desocupados, hizo que no desaparecieran de la escena política. Desde mediados de los años 90 se verificó un ciclo de auge de luchas sociales ligadas al impacto de la implementación de una profunda reestructuración de las relaciones entre el capital y el trabajo, de la mano de políticas públicas impulsadas por

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

los organismos internacionales de crédito y el Consenso de Washington (cf. Piva y Bonnet, 2009; Bonnet, 2011).

Para Piva (2009) el ciclo de crecimiento de la conflictividad obrera fue caracterizado como una “conflictividad fragmentada”, relacionando este fenómeno, aunque no de manera lineal, “con la fragmentación estructural de la clase obrera producto del proceso de reestructuración del capital” (Piva, 2009: 27), donde las privatizaciones de empresas, la hiperinflación y la hiperdevaluación de la moneda daban el contexto a una clase obrera debilitada, en el que aumentaba descomunadamente el desempleo que se irá consolidando en esta etapa como desocupación estructural.

Mészáros advertía que una de las consecuencias del desempleo estructural, al transformar el tradicional ‘ejército de reserva’ en una fuerza laboral superflua, se convertía en una amenaza explosiva con efectos inauditos para el sistema en su totalidad, incluso para la reproducción ampliada del capital. “Declarar sobrante a una porción muy grande de la población constituye una contradicción inmensa. Esa porción de la población no va a mantenerse por siempre sumisa y dócil y resignada a las condiciones a las que la condenaron” (Mészáros, 1995: 1140).

Algunos autores analizan el ciclo de luchas abierto en el Santiagueñazo (1993), pasando por Cutral-có y Plaza Huincol (1996; 1997), Tartagal y Mosconi (1997), lo cual comprende un escenario político de distintas formas de protesta –estallidos locales, cortes de ruta, revueltas en las provincias, huelga general– hasta llegar al momento de la insurrección espontánea de diciembre de 2001, posibilitando un cambio en las correlaciones de fuerzas entre las clases e inaugurando otro ciclo político que tomará forma en el año 2003.

Se recogen diversas denominaciones, para caracterizar a estas jornadas y procesos que desembocan en diciembre de 2001 tales como rebelión popular, jornadas revolucionarias, jornadas destituyentes, estallido social, junto al Argentinazo. Para Iñigo Carrera y Cotarelo (2003) se trató de una insurrección espontánea, dado que las dos condiciones necesarias para identificarla como

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

insurrección consciente no estuvieron desarrolladas. Estas son, que no sólo exista disposición a la lucha por derribar el poder político de la clase dominante, sino que también actúe una o un conjunto de organizaciones políticas en unidad preparadas (teórica y prácticamente) para dirigir a las masas populares. Una insurrección espontánea que nuclea y moviliza diversas capas sociales bajo la consigna “que se vayan todos”, enfrentando así al gobierno (representado por De la Rúa) e impugnando a la clase dominante. Para estos autores la Insurrección espontánea presenta rasgos característicos, como: “1) la muchedumbre en la calle, 2) no organizada, 3) que espontáneamente levanta barricadas; 4) dando lugar a una lucha de calles, 5) en que las masas pasan por encima de las organizaciones” (Iñigo Carrera y Cotarelo, 2003: 300).

Este componente espontáneo que superó completamente a las conducciones políticas, expresaba un proceso de lucha defensiva en el que la clase trabajadora en su conjunto exigía un cambio de rumbo político, pero sin tener definido un proyecto propio, sin entrar todavía en el terreno de la hegemonía política. Se trató de una impugnación del modelo existente, más que una disputa de poder en función de otro proyecto. En aquellas organizaciones que aspiraban a un cambio social estructural, esta ausencia de debate estratégico y programático va a marcar su derrotero posterior, en la medida en que las mismas avanzaron en la conformación de organizaciones políticas o se constituyeron como base de apoyo a dichas expresiones.

Más allá de que años después se desplegará un nuevo mecanismo de disciplinamiento para la clase obrera organizada, la lucha del sector logró un dinamismo muy importante que enfrentó la desocupación como destino final. Podríamos sintetizar aquel proceso que, aunque no estuvo exento de contener rasgos heterogéneos y diversas tendencias políticas en las que se expresó, logró importantes niveles de unidad y enormes conquistas corporativas y colectivas para un sector de la clase trabajadora.

Este período que va entre mediados de los años 90 hasta el 2004/2005 se caracteriza por luchas que desbordan el sistema institucional, que no tienen lugar en

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

la política social y en la respuesta estatal, y que se sustentan fuertemente en el ejercicio de la democracia y la acción directa. La conflictividad que expresó el movimiento de trabajadores desocupados forma parte de un contexto más general y de amplios sectores en lucha, que se encontraban atravesados por rasgos comunes, en un clima de época.

Para el caso de los desocupados, manifestaron su resistencia por medio de cortes de rutas para interrumpir la producción e impidiendo la circulación de mercancías. Esto se desarrollará en el marco de un trabajo socio-territorial de los Movimientos de Trabajadores Desocupados, (MTD) implementando comedores, merenderos, huertas y proyectos productivos autogestivos, para paliar la crisis. Lograrán también la implementación de diversos planes sociales, obtenidos en la disputa con los distintos gobiernos. La conquista de planes y asistencia alimentaria, se daba a través de la movilización a las sedes municipales y a los supermercados, con una dinámica que implicaba la deliberación en el medio de la acción directa, la negociación, que finalizaba con la socialización de la información en el corte, y la aceptación o no de la propuesta, debatida en la propia asamblea.

El movimiento de fábricas recuperadas asumía el control de la producción, poniendo a andar los establecimientos que las patronales cerraban bajo métodos fraudulentos. La recuperación implicaba, en la mayoría de los casos, la toma del edificio y sus maquinarias, la resistencia a los desalojos (en las que se constituía un apoyo amplio de las familias, de trabajadores de otros sectores, de estudiantes y, en muchos casos, de la comunidad), y la vuelta a la producción sin el comando del dueño. Bajo la consigna de “ocupar, resistir y producir”, un conjunto de experiencias avanza en todo el país, con Ex-Zanón/Fasinpat como emblema de la recuperación bajo control obrero.

Muchas de estas fábricas se constituyeron como espacios abiertos y fueron sede de radios comunitarias, centros culturales, bachilleratos populares, y algunas orientaron su producción o sus servicios a apoyar otras iniciativas productivas o comunitarias, logrando evidenciar el sentido social de la unidad productiva. Más de

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

300 recuperadas lograron persistir hasta la actualidad bajo la forma de cooperativas de trabajo.

El Movimiento de Derechos Humanos tuvo una nueva vitalidad con el surgimiento de agrupaciones como HIJOS, en 1995, que articula luchas históricas contra el terrorismo de Estado, junto con la identidad juvenil y al enfrentamiento de la represión llevada a cabo por las fuerzas policiales. Entre las acciones directas de este sector aparecerá la consigna “si no hay justicia, hay escrache”, con lo que devela el carácter persistente de la impunidad y ejercitando una condena social ante la falta de una condena jurídica. También se creará la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional (CORREPI) en 1992, y junto a las marchas de la resistencia impulsadas por las Madres de Plaza de mayo, desde 1981, serán los espacios para visibilizar y denunciar los procesos represivos.

Los estudiantes secundarios y universitarios junto a los docentes, enfrentarán en las calles y con distintas medidas de lucha (tomas de colegios, facultades/rectorado; abrazos al Congreso y marchas de antorchas) la reconversión de la educación impulsada por el Banco Mundial, enfrentando las Leyes de Educación Federal (1993) y de Educación Superior (1995).

Las asambleas populares se multiplicarán durante el 2002, cuya identidad de clase media empobrecida urbana regará las calles de las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, conformada por “nuevos pobres”, pequeños ahorristas y comerciantes afectados por el corralito y las restricciones económicas. Ellos confluirán durante el 2002 con los piqueteros al grito de “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Varias de las asambleas populares tendrán un perfil más plebeyo incorporando ollas populares, prácticas de subsistencia frente a la crisis que no se diluirá con la estabilidad de la economía. La necesidad de contar con espacios de reunión comunitarios, en el que se organizaba la resolución de los problemas comunes implicó la recuperación de espacios, galpones, inmuebles en desuso para desarrollar comedores, emprendimientos productivos, espacios culturales, etc.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Los movimientos sociales rurales integrados por campesines e indígenas en Santiago del Estero, Formosa, Córdoba y Misiones se articularon en la lucha por la tierra y los bienes comunes, oponiéndose al modelo productivo sojero imperante, y fomentando otras redes de intercambio de productos y de semillas. Estos serán sujetos fundamentales en la defensa de los territorios. Desde el 2006, se formaron las UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas, hoy “de Comunidades”) enfrentando las consecuencias del extractivismo y del saqueo de los recursos y bienes comunes, como los minerales, el petróleo y el gas.

Los encuentros de mujeres, desde 1986, se convirtieron en un espacio fundamental de estructuración de las luchas feministas en nuestro país. Con una estrategia de autoorganización, de debate colectivo, plural y una política de autofinanciamiento, llega a nuestros días configurando los actuales Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Trans, Travestis, Bisexuales y No Binaries. Con el 2001 se multiplican las colectivas feministas, socorristas y redes contra la trata por todo el país, y se masifica el movimiento de mujeres y disidencias, de la mano de las organizaciones de trabajadores desocupados que acercan las demandas de los feminismos populares.

Un rasgo común que atraviesa muchas de estas experiencias y que constituye una de las principales rupturas es no apelar a que “otros” resuelvan, o no esperar los tiempos del sistema burocrático institucional para exigir al Estado, sino hacerlo por los propios medios y con las propias fuerzas o recursos de las organizaciones. Las acciones desplegadas por los sujetos colectivos se caracterizan por un rechazo a la acción política centrada en la dinámica institucional, y desarrollan experiencias basadas en formas de construcción horizontales, de alta democracia interna, a través de las asambleas, cabildos u otras formas colectivas de toma de decisiones. Esas acciones se constituyen en un verdadero “poder de hecho” al enfrentar la crisis de legitimidad de las Instituciones y la necesidad de no seguir los canales específicos para resolver las problemáticas sociales, que se expresará en la perspectiva adoptada por varias organizaciones en la construcción del poder popular.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

La masividad y expresividad que logró en sus trabajos cotidianos de construcción territorial, junto a un despliegue político que supo ocupar el escenario callejero, lleva a Svampa (2011) a considerar la constitución de un nuevo ethos militante, expresada en la generación del 2001, “articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y la horizontalidad de los lazos políticos (...), la necesidad de la construcción «desde abajo» y la exigencia de la articulación entre política y ética” (Svampa, 2011: 22). Para la autora, Kosteki y Santillán emergerán como emblemas de esa juventud militante y popular. Esta rebelión o desobediencia se mantiene activa durante los años posteriores al 2001 y tensiona el sistema institucional. En la misma confluyen distintas expresiones políticas, algunas que tenían su horizonte en un cambio de “modelo” y otras que planteaban un “cambio social” de raíz.

Esto nos conduce a analizar con detenimiento la ruptura de la relación con la autoridad estatal, que conlleva un sinnúmero de actos de desobediencia, que muestran que es posible desobedecer y también que eso tiene resultados en términos de conquista de reivindicaciones inmediatas. Este fenómeno ha sido largamente tematizado, tanto en la literatura académica como entre las organizaciones sociales, sus órganos de prensa y sus revistas, y abrió paso al debate en torno al Estado y sus políticas sociales (por fuera/ por dentro, dentro/contra y más allá, y también, en cómo se expresa el carácter de clase en las políticas sociales). La desobediencia se manifestó además en un proceso global de luchas e insubordinaciones, entre fines de los 90 y el comienzo de los años 2000. Las recetas del FMI y del BM, que implican las reformas de ajuste estructural, generaban consecuencias sociales para las cuales la respuesta estatal era completamente insuficiente e ineficaz en la contención de la conflictividad social. En función de esto, la tendencia a la autogestión tiene un componente de proyecto político con autonomía pero que se conjuga con una realidad material concreta, que es la imposibilidad de canalizar demandas a través de la estructura estatal. A su vez, los procesos de luchas en Latinoamérica influyen en la configuración de los movimientos sociales de nuestro país. El Zapatismo en México y el Movimiento Sin Tierra de Brasil, aún con sus diferencias de horizonte estratégico, ofrecían un

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

marco para pensar la posibilidad de conquistar territorialidades bajo las cuales imponer otras relaciones sociales, conquistar tierra, producir colectivamente, construir escuelas, y ejercitar otra forma de poder político y de decisión sobre lo común.

Este conjunto de experiencias deja como legado en la memoria reciente la noción de autonomía en clave de aspiración o búsqueda, y supera la visión *cosificante* y binaria, expresada en algo que se “tiene” o “no”, complejizándola en un proceso que tiene avances, estancamientos y retrocesos por ser parte del movimiento histórico.

Para Dinerstein (2013) se trata de “una aspiración (im)posible”, (...) que soporta en su interior la tensión dada entre la posibilidad de construir realidades alternativas a la capitalista (nuevas o ancestrales) y el riesgo de ser apropiadas y convertidas en un instrumento de la descentralización neoliberal” (2013: 150).

Mabel Twaites Rey afirma, que la autonomía colectiva, “condensa la riqueza y las dificultades que se le plantea a toda gesta común con vocación emancipatoria” (Twaites Rey, 2013: 9). Para ella, “la tendencia a la reabsorción de demandas populares es constitutiva de la naturaleza del estado capitalista” (2013: 13). Según la autora, hay dos desafíos centrales y entrelazados a los que vincula a la noción de hegemonía. Uno de ellos es “cómo enfrentar la institucionalización estatal de las prácticas conquistadas por las luchas, cuando aquella pretende pasteurizar su potencialidad disruptiva para reencauzarlas en la lógica dominante”. El otro desafío que presenta es “cómo expandir la experiencia autónoma más allá de los límites territoriales en que se desarrolla y convertirla en un modo genuinamente alternativo para las relaciones sociales generales” (Twaites Rey, 2013: 12).

Sin duda, este concepto se articula con la idea de anticipar el porvenir en Gramsci, cuando sostiene que “el Estado socialista existe ya potencialmente en las instituciones de vida social características de la clase obrera explotada” (Gramsci, [1970]1992). Esta idea de prefiguración fue un horizonte que circundó a muchas de las experiencias, sobre todo a quienes fundan su praxis cotidiana desde una relación de temporalidad política, a partir de la síntesis entre presente, pasado y futuro,

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

superando lógicas centradas en la inmediatez reproductiva, sólo desde el aquí y ahora en la temporalidad capitalista neoliberal.

Las experiencias de autogestión resultan necesarias para el ejercicio de la autonomía como desafío, en tanto los sujetos que disputan el territorio y cuestionan el poder (Almeyra, 2004), buscan superar la división entre “dirigentes y dirigidos” que hace que “cada uno sea dirigente de sí mismo y dirigido por un colectivo del que es parte activa y consciente”. Implica la ruptura con las relaciones de producción y dominación capitalistas y con la división del trabajo y la organización del proceso de trabajo según normas de mando-obediencia” (Almeyra, 2004: 183). Por eso, estas experiencias aportan la formación de autoadministración donde se formarán los “cuadros para la autogestión cuando ésta sea social y generalizada” (op. cit. 2004: 185). Lo esencial es crear organización y crear contrahegemonía frente a la organización opresiva estatal y a la hegemonía cultural y política de los dominantes (Almeyra, 2004). Para este autor lo que se dio en las puebladas, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales y la organización de algunos sectores piqueteros son ejemplos de autoorganización y de creación de poder popular desde abajo, construyendo una experiencia en común que para muchos de sus participantes se constituirá en una marca indeleble, latente y dispuesta a expresarse y multiplicarse en otros procesos.

La respuesta estatal post 2001. Integración y recomposición del sistema de dominación

La respuesta estatal ante esta insubordinación fue buscar, como objetivo central, la recomposición del sistema político y el reencauzamiento de la conflictividad de clase en los márgenes de la institucionalidad. Las políticas fueron el resultado de aquella rebelión y, al mismo tiempo, impactaron en las propias organizaciones sociales, en sus formas organizativas, en su proyecto político estratégico, en función de la relación entre reclamo, reivindicación, conquista y concesión.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

La asignación de recursos para las políticas asistenciales en Argentina, tuvo una base de sustentación en lo que se denominó ciclo de las *commodities* (Piva, 2015). La política social que surge como respuesta ante la conflictividad se enmarca en una impronta de desarrollo capitalista periférico, proveyendo materias primas y manufacturas de bajo contenido tecnológico (Féliz, 2011). La exportación de bienes primarios permitió contar con fondos para redistribuir, y a partir de la recuperación económica vinculada a la salida del modelo de la convertibilidad, el índice de desocupación descendió, y se estabilizó entre el 7 % y 9%, sin que se recuperen los guarismos de inicios de los '80. Este proceso de recuperación del empleo se hizo sobre la base del aumento del trabajo precarizado, lo que significó un cambio significativo en la composición de la clase trabajadora, con una fuerte fragmentación estructural al interior.

Las políticas sociales del período post 2001 van a estar enmarcadas, a su vez, en la orientación de los organismos internacionales de crédito. Si en un primer momento el “combate a la pobreza” estaba ligado a los programas focalizados de asistencia, luego de la irrupción de las movilizaciones de fines de los 90 y principios del 2000, en América Latina, los programas asistenciales cobrarán mayor magnitud y alcance, y se plantean en el marco de la lógica de las condicionalidades. La política social a su vez, estaba condicionada por los préstamos que se obtenían a cambio de implementar un determinado modelo:

(...) la práctica de las condicionalidades se convirtió en una característica destacada de su *modus operandi*. Para asegurar el cumplimiento de estas prescripciones, no solo se recurrió a la amenaza de suspender los préstamos a los gobiernos receptores, sino que también fue alentado a través de relaciones más estrechas entre el FMI, el Banco Mundial, varios bancos regionales de desarrollo y acreedores privados. El Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo consolidaron su influencia política a través de una mayor selectividad en la concesión de préstamos para proyectos a países que cumplieran con estas políticas. (Stubbs y Kentikelenis, 2021: 179)

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Ante estos trazos y analizando las acciones que llevaron adelante los desocupados en los finales de las décadas del 90' y principios del 2000, Marro (2011) define a las políticas sociales como estrategias de contrainsurgencia llevadas adelante por el Estado y los organismos internacionales de crédito para controlar el conflicto social.

Es necesario aquí introducir una salvedad respecto de la idea de contrainsurgencia. La noción se encuentra asociada a la eliminación de la acción de grupos políticos (o político-militares) que atentan contra el poder del Estado. Coincidimos con que las políticas sociales, impulsadas por los organismos internacionales, cuentan con un componente político, en tanto buscan orientar la política pública y debilitar el poder político y social de la clase trabajadora. También incluyen el uso de la violencia –en tanto se acompañan de políticas represivas y de criminalización de la protesta social–, ya que el objetivo no es tanto destruir o perseguir grupos políticos con peso significativo, sino evitar que la conflictividad social brinde el espacio para que se recompongan en términos políticos y se constituyan como tales.

En coincidencia con el objetivo de apaciguar la conflictividad de clase y otorgarle un cauce institucional, en el marco del sistema imperante, la política social del gobierno kirchnerista se propuso reconfigurar el abanico de políticas sociales y de contención de la pobreza. A diferencia del período inmediatamente posterior al estallido del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se propuso una estrategia diferente de manejo de la conflictividad. Luego de la represión del 26 de junio de 2002 en la que fueron asesinados Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, la salida represiva se volvió ineficaz para aislar y contener, de cara a la sociedad, los reclamos del sector. Hacia 2003 se produce un giro que se condensa en el “ni palos- ni planes” para el sector que enfrenta al gobierno (Piva, 2015).

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

El gobierno desde mediados de 2003, enfrentó la alta conflictividad del movimiento de desocupados con una política que combinó la satisfacción gradual de demandas y una estrategia de aislamiento del denominado sector duro. (Piva, 2015: 100)²

Más allá de esta estrategia política visible, que se propuso disciplinar al movimiento a partir del reconocimiento de sus demandas, necesitamos rastrear un mecanismo más imperceptible en los movimientos sociales, aún en aquellos que mantuvieron oposición al gobierno y conservaron su independencia política. Nos referimos a que no fue solo la incorporación de demandas, que se dio a través del mecanismo de un trabajo diferente según la identidad política de los movimientos, sino que, la política social a partir de la propia forma administrativa que adopta, impactó en el movimiento imponiendo un modo diferente de ejercicio del poder. La integración o institucionalización de las organizaciones no se limita a reconocer la posibilidad de participación de las mismas en la estructura del estado sino a partir de convertirse ellas mismas en capítulos o momentos de la acción estatal. En tanto la organización burocrática del Estado supone una determinada forma de ejercicio del poder, la vinculación orgánica de los movimientos con la acción estatal supone que el interés de clase que caracteriza al Estado capitalista se cuele dentro del propio movimiento y convive –al menos como tensión–.

Ubicamos tres momentos, a modo de periodización, en relación a las políticas sociales y su impacto en el movimiento de trabajadores desocupados. Un primer momento de masificación de la asistencia y de tratamiento diferencial de los

² Piva (2015) reconoce tres sectores dentro del movimiento de trabajadores desocupados: el primero con una posición oficialista con el nuevo gobierno que no tenían una práctica “antiestatal” sino que anhelaban la restauración de un Estado populista. El segundo sector plantea una posición moderada quienes mantienen líneas de negociación y moderan la radicalidad de las medidas. Y por último el sector más duro de un conjunto heterogéneo de organizaciones que mantendrá una posición de enfrentamiento al gobierno. Este alineamiento será dinámico e irá teniendo variaciones conforme se van transformando los escenarios políticos.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

movimientos sociales, según su identidad política. Este momento también estuvo asociado a la adopción, en la estructura estatal, de programas que dialogaban con esa autogestión en la resolución de problemas de empleo. (Programa Manos a la Obra). Un segundo momento se constituye luego del conflicto entre el campo y el gobierno y la derrota electoral del gobierno en el año 2009. Este momento se caracterizó por la instrumentación del Programa Argentina Trabaja (PAT) que implicaba la conformación de cooperativas de trabajo, destinadas a desocupados, para realizar tareas en la órbita municipal a cambio de un ingreso de subsistencia. Las cooperativas y asociaciones civiles, que los propios movimientos gestionaban, comienzan a tener una fuerte dependencia estatal y a administrar una gran cantidad de planes sociales. Esto fue el comienzo del debate sobre la sindicalización del sector precarizado. Un tercer momento lo constituye el cambio de gobierno a fines de 2015, por uno de corte conservador, que asumió con la expectativa de poder introducir reformas para reducir el “costo” laboral y previsional, que intentó restar capacidad de control sobre la asistencia a las organizaciones sociales, y que, finalmente, en función de su escaso control de la conflictividad, debió “comprar” gobernabilidad destinando recursos a los movimientos. Repasamos a continuación los principales rasgos de la política social de cada momento.

Inmediatamente después del estallido de diciembre de 2001, y aún con el gobierno provisorio de Eduardo Duhalde se produce la masificación de los programas de asistencia a los desocupados. De 200.000 Planes Trabajar se pasa a 2 millones de Plan Jefes y Jefas de Hogar. En el año 2006 y con la recuperación progresiva del empleo (aunque fundamentalmente en base a empleo precario) se busca una doble estrategia: aquellos “empleables” debían optar por el Seguro de Capacitación y Empleo y sostener la asistencia mientras se capacitaban y buscaban empleo y aquellos trabajadores “inempleables” pasarían al Plan Familias (Campos et al., 2007).

El traspaso de los Planes Jefes y Jefas de Hogar Desocupados al Plan Familias, debilitó la capacidad de control de las organizaciones respecto a esta prestación social, fortaleciendo el papel del Estado con las familias destinatarias, sin la mediación de las organizaciones sociales. Mientras que el Plan Jefes y Jefas de Hogar obligaba a

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

una contraprestación laboral de 4 a 6 hs diarias, que debía realizarse, y que las tareas dentro de los movimientos permitía acreditar, el Plan Familias imponía otro tipo de obligaciones como la de cumplir con la escolaridad y los controles de salud de los niños destinatarios de la asistencia.

Los recursos otorgados a las organizaciones pasaban fundamentalmente por el financiamiento de proyectos productivos autogestivos.

En 2006 el gobierno nacional anuncia el cambio del plan JJHD. Ese mismo año firma una serie de convenios con algunas organizaciones sociales a través de los cuales invierte un monto de dinero orientado a la multiplicación de proyectos productivos y microemprendimientos: \$4.680.000 para la confección de guardapolvos; \$70.000 para la comercialización de carnes de frigoríficos recuperados, \$70.000 para el plan el Trabajo Dignifica; \$55.000 para la compra de maquinarias textiles y \$55.000 en la Banca Social para microemprendedores. Es decir, la política social del gobierno se comienza a caracterizar por el aumento creciente de los fondos destinados a microemprendimientos y una disminución de aquellos que sostienen los planes sociales. D'Amico, 2006

Por otro lado, el Plan Manos a la Obra, que buscaba subsidiar a las estrategias autogestivas de producción que venían desarrollando las organizaciones de desocupados, no iba acompañado de un proyecto integral de políticas para el sector de la denominada economía popular. No implicó una política de impulso económico sino una contención de las capacidades y los atributos productivos del sector de desocupados (Seiffer y Matusevicius, 2010).

En suma, en este primer momento, se le da un lugar institucional a la protesta, con la organización del acceso a los programas, la imposición de procedimientos, requisitos y trámites administrativos, lo que requirió, progresivamente, un conocimiento burocrático específico que se traslada al interior de los movimientos, en "oficinas" que realizan el trabajo de organización de la documentación de los

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

movimientos piqueteros. Este proceso de separación de la administración respecto de las propias asambleas locales se profundizará con la conformación de unidades ejecutoras. A su vez, el sector “oficialista” del movimiento piquetero cogestionó estas políticas, pero de un modo subordinado, limitándose a brindar apoyo a las medidas de gobierno y a monitorear su implementación (D’ Amico, 2006).

Un segundo momento está vinculado a la necesidad del gobierno kirchnerista de recuperarse políticamente, luego del terreno perdido, en términos de alianzas sociales, que sobrevino después del conflicto con las patronales agrarias y al retroceso electoral del año 2009 (Cantamutto, 2017). Como parte de un conjunto de medidas, el gobierno impulsa el Plan Argentina Trabaja (PAT) a fin de recuperar posiciones y, en conjunto con otras estrategias, se dio la tarea de recomponer cierto control territorial. La anunciada creación de 100.000 puestos de trabajo tenía a las oficinas municipales y a referentes ligados a esos gobiernos, como “puerta de entrada”, fundamentalmente en el conurbano bonaerense. Si bien la inscripción era individual, las personas debían formar parte de una cooperativa para acceder al ingreso que retribuía su trabajo en la cooperativa. Se crearon “19.847 cooperativas de trabajo en el marco de 11 programas sociales, tanto del MDS como de otros ministerios o programas provinciales y municipales. El 41% del total de esas cooperativas se crearon en el marco del PRIST-AT (Programa de Ingreso Social con Trabajo)”³ (Arcidiácono y Bermúdez, 2018: 66).

El Plan fue considerado por los movimientos como un paliativo o programa social, más que como una fuente de reactivación económica o generación de trabajo. Se puede afirmar también que, de acuerdo a los conceptos presentes en la formulación del mismo, predomina la idea de política social, en su sentido redistributivo, –no resulta un dato secundario que dependa del Ministerio de Desarrollo Social–, y en donde el Estado actúa como compensador de desigualdades que serían provocadas por el mercado. Queda oculta su función económica, que se

³ Arcidiácono y Bermúdez (2018) recuperan que este proceso se da entre 2003 y 2015 y que incluye a la línea del Programa Ellas Hacen.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

refiere fundamentalmente al abaratamiento de la fuerza de trabajo, y a través de la socialización de los costos de su reproducción, crea y otorga trabajos vinculados a la esfera de los servicios en la órbita municipal (obras públicas de baja complejidad) y promueve la economía popular, con el despliegue de proyectos productivos de baja escala.

Pilar Arcidiácono et al. (2014) analiza la conformación de estas cooperativas de trabajo vinculadas al Plan Argentina Trabaja y sostiene que las mismas no obedecen a un proceso autogestivo autónomo, sino que se construyen según la necesidad del propio programa y eso es lo que garantiza su viabilidad. En tal sentido las autoras recuperan el reglamento como una de las categorías de análisis que permite visualizar una lógica verticalista, en la que las definiciones democráticas de sus integrantes quedan *secundarizadas* y subordinadas a una lógica de coordinación que, mediante los estatutos y la figura de los capataces, pueden dar de baja a quien recibe la prestación. Tal como lo enuncian las autoras es el 'reglamento', donde "se establece que, el grupo de capataces de obra tiene a su cargo el control de las jornadas de trabajo de cada uno de los asociados, es decir días y horarios, para poder hacer los ajustes correspondientes al mes trabajado" (Arcidiácono et al., 2014: 349). Esta situación es uno de los elementos que nos lleva a afirmar que se trata de una construcción cooperativa bajo dependencia y control del programa, utilizando mecanismos de disciplinamiento que contrastan con la autoorganización de las experiencias previas.

Entonces si bien se apela en lo discursivo a una forma organizativa propia de las organizaciones populares, a un modelo de autogestión y autogobierno, se define de modo exterior, desde el Estado, el modo de ejercicio de la capacidad de decisión de las personas asociadas o al menos, las organizaciones deben lidiar con esta tensión. Al establecer como requisito la figura de los capataces, con funciones jerárquicas y un ingreso diferente, se introduce la jerarquía propia de la organización estatal, muy contraria al pretendido objetivo de horizontalidad en la toma de decisiones propia de algunas organizaciones de trabajadores desocupados en los orígenes.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Por otro lado, es necesario analizar las políticas sociales desde la lógica de una focalización territorial, dado que se invoca la importancia de la participación de la comunidad en proyectos, en decisiones políticas, en el diseño de políticas sociales, en la implementación de leyes, etc. aunque se trate de una participación subordinada. En pos de esto, se descentralizan acciones nacionales y/o provinciales, pasando el municipio a tener un protagonismo estatal, legitimándose y recuperando el control del territorio. Las mesas de gestiones barriales y/o regionales son la forma de articulación estatal, que, a la vez que fortalecen la corresponsabilidad, desdibujan la responsabilidad del Estado en la manutención de la desigualdad como principio organizador de la sociedad. Estas fueron algunas de las estrategias de recuperación del territorio, asimilando a las organizaciones de base territorial en espacios institucionales.

A su vez, la cantidad de programas sociales de corto alcance que conviven en la atención asistencial, exigen, para su obtención, la justificación continua de la situación de “vulnerabilidad social” de la persona inscripta, quien busca garantizar un ingreso, aunque magro, mediante el acceso a un subsidio, a un complemento alimentario, etc.

El tercer momento, entonces, estará vinculado a un cambio más general de ciclo político, con la llegada del gobierno de Cambiemos, que se proponía giro drástico en la matriz de derechos sociales y buscaba establecer una nueva hegemonía política. Como parte de esto se dio una doble estrategia de atacar o intentar desprestigiar a las organizaciones sociales y gremiales, planteando un control represivo de la protesta social y, por otro, se intentó negociar gobernabilidad con las organizaciones piqueteras a partir del otorgamiento de recursos. El gobierno neoliberal y anti popular, a diferencia de otros períodos históricos, no contaba con un proceso de disciplinamiento social, y el movimiento popular, aunque fragmentado, mostró gran capacidad de respuesta ante los planes que atacaban abiertamente sus intereses.

El gobierno implementó una serie de cambios en las orientaciones de las medidas de corte político económico que agudizaron la contradicción capital-trabajo dejando como saldo 200 mil nuevos desocupados; el aumento de los servicios básicos

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

(gas, luz, transporte); una inflación anual de más del 40% y 1,3 millones de nuevos pobres, con un índice de pobreza que llega al 32%, reconocido por el INDEC.

Respecto de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, se sostuvo, al inicio, una política de “descolectivización de la asistencia” (Arcidiácono y Bermúdez, 2018), al impulsar la modificación de dos programas, el Ellas Hacen y el PAT, unificándolos con la puesta en marcha del Programa Hacemos Futuro. El mismo pretendía reorientarse hacia el énfasis puesto en las trayectorias individuales y de competencia y capacitación personal, para “merecer” la asistencia.

Frente a dicha coyuntura es que un amplio abanico de organizaciones sociales y piqueteras decide impulsar la ley de Emergencia Social y Alimentaria. Para ello se constituirán en una alianza denominada “Triunvirato Piquetero” compuesto por Barrios de Pie, Corriente Clasista Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). En este contexto se sanciona la Ley 27.345 de Emergencia Social y Alimentaria, la cual hace su ingreso a la escena política durante el 2016, primer año de la gestión de Macri.

La ley establecerá la declaración de la emergencia social y alimentaria en todo el territorio argentino hasta diciembre de 2019, y contiene como puntos centrales: la creación de un millón de cupos nuevos para el Programa Argentina Trabaja; la creación del Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Autogestionadas (RENATREP), en el que todas las cooperativas deberían registrarse para ser reconocidas por el Estado; la creación del Consejo de la Economía Popular, organismo que reconoce a los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas y la economía popular; la creación del Salario Social Complementario para todos aquellos trabajadores registrados en el RENATREP, que implicaría un salario complementario de 4000 pesos para todo aquel trabajador reconocido y registrado dentro de la economía popular; y el incremento del 15% en la Asignación Universal por Hijo y Embarazo.

Asimismo, establece que el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario tendrán entre sus funciones proponer criterios, mecanismos de

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

inscripción, admisión, clasificación y permanencia en el Registro Nacional de la Economía Popular. Entra a jugar aquí la trama ligada a un acuerdo de “paz social”, que intenta bajar el nivel de conflictividad en razón de la participación en dicho Consejo, poniendo un freno al descontento social frente al ajuste y al aumento de la pobreza.

La ley de emergencia social y alimentaria, en tanto política social de asistencia de este período, implicó la política de masificación de la “ayuda social” y la posibilidad de que se ataquen los salarios y las condiciones de trabajo establecidas en los convenios colectivos de algunos sectores, centralmente el de los trabajadores municipales, los de recolección de residuos y el del gremio de la construcción. El Salario Social Complementario como parte de la ley de emergencia social, es el eje articulador de dichas políticas con la generación de “trabajo con su par precario”.

La obtención de los mismos, ya desde el año 2016, se concreta con la exigencia a las organizaciones y cooperativas de constituir entes ejecutores donde los trabajadores precarizados son los encargados de administrar los recursos para las obras que se emprenden y los costos de la seguridad en el trabajo, por lo que se constituyen prácticamente en sus auto empleadores. La conformación de los entes ejecutores, obligó al conjunto de las organizaciones de desocupados a tener que aprender y constituir dichas unidades para seguir recibiendo fondos, tercerizando costos de administración. Las organizaciones debieron alquilar locales para un sinnúmero de tareas administrativas, realizar aprendizajes de soportes tecnológicos engorrosos y destinar sus esfuerzos a realizar una suerte de administración técnico-contable de los fondos y de las obras que realizan.

En este sentido, los programas de empleo que se vienen desarrollando en la última década se caracterizarán por presentarse con valores ligados a la “economía popular”, en tanto recuperan el cooperativismo y asociativismo como salida a la desocupación, pero va cobrando cada vez más fuerza el componente estatal por cuanto dependen de esa transferencia monetaria para lograr una retribución que alcance a cubrir las necesidades de reproducción para los trabajadores. Los programas brindan ciertos mecanismos de protección de la seguridad social, precarios, que

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

implican el registro como trabajador en un monotributo social -garantizando el derecho a la jubilación y obra social-, siendo una transferencia directa que realiza el Estado. Se abandona la perspectiva de fortalecer la economía popular como un sector más de la economía, al que es necesario destinar una política integral para fortalecer sus capacidades productivas. No se busca reorientar el gasto para promover el “compre nacional” a los productos de este sector, no se consolidan cadenas de comercialización en los que se insertan estos productos o servicios. Se deja a las experiencias cooperativas y autogestivas libradas a la competencia desigual entre capitales, y se le asigna un lugar de contención social y de asistencia. Este carácter es permanentemente disputado por las organizaciones.. Por otro lado, desde la política social se presenta como oportunidad el direccionamiento de los planes sociales hacia empresas privadas y algunos organismos, estimulando la contratación “subsidiada” de trabajadores, al permitir que les empleadores eviten pagar una parte del salario – cubierto por el plan social–, convirtiéndose así en un subsidio directo al capital.

A estas formas de asistencialización del desempleo se le suma el salario social complementario estipulado en la ley de emergencia social que establece plazos de asistencia, al mismo tiempo que profundiza las condiciones de precarización del sector desocupado, garantizando transferencia directa –con una contraprestación ya enunciada– sin contener ningún mecanismo de protección social, escondiendo tras el velo mayores mecanismos de control y disciplinamiento de la clase trabajadora, subyaciendo la idea de trabajadores en tanto objetos pasivos de políticas sociales compensatorias.

Este apretado recorrido por los principales componentes de la política social post 2001 nos permite, por un lado, reconocer el modo en el que el Estado dialoga con la conflictividad social y busca contenerla, dotándose de distintos mecanismos regulatorios. Los planes y programas asistenciales que surgen en este marco tienen un doble carácter en tanto reconocen demandas, pero al mismo tiempo encorsetan su acción política autónoma, aquella que conecta la capacidad organizativa de las organizaciones populares con el horizonte de otras relaciones sociales.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Conclusiones

En la actualidad asistimos a la revitalización de luchas que intentan poner freno a nuevas ofensivas. Las luchas socioambientales se levantan contra el avance de la megaminería en varias provincias, como Mendoza y Chubut, y en otras las experiencias de producción agroecológica confrontan con el modelo del agronegocio. Las luchas de los trabajadores del sector público de la salud, en defensa de la recomposición salarial, con el caso destacado de los trabajadores autoconvocados de la salud de Neuquén, se articulan con la lucha contra las consecuencias territoriales del *fracking* y con la gigantesca marea verde que irrumpió en las calles por el derecho al aborto legal seguro y gratuito. El reclamo por tierra para vivir, que comenzó en la localidad de Guernica, se extendió a otros puntos del conurbano bonaerense y a las recuperaciones ancestrales del territorio sitiadas y criminalizadas. Así, el movimiento piquetero continúa construyendo, desde la independencia política, mediante la apuesta a esas experiencias de institucionalidad contrahegemónica. En esas luchas persisten algunos elementos que caracterizaron al ciclo del 2001. La dinámica asamblearia para la toma de decisiones, los cortes de ruta, la apuesta a la acción directa, las redes y alianzas sociales con otros sectores en lucha, en definitiva, la búsqueda de la autonomía, como posibilidad de enfrentar y cambiar las relaciones sociales capitalistas-patriarcales-destructivas. En cada una de estas expresiones reaparece la memoria de la experiencia del 2001, reintroduciendo las tensiones que conlleva construir procesos que expresen la potencia de un poder por abajo con autonomía de los gobiernos y sectores hegemónicos.

El desafío que enfrentan las organizaciones territoriales es la incorporación de la burocracia, propia de la acción estatal, en su propia organización colectiva interna. El estudio de Luisina Perelmiter (2015) reconoce los límites de la burocracia plebeya, la de aquellos militantes que se incorporan a la administración estatal en tanto funcionarios, y reconoce el obstáculo que implica para la relación con el trabajo territorial el carácter del sometimiento a procedimientos y normas administrativas.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Aquellos que ocupan posiciones de gobierno no se limitan a “apropiarse” del aparato público, subordinándolo a sus fines, sino que se ven condicionados por el tipo de rol que el ejercicio de la función estatal, y sus instrumentos, necesariamente les impone, más allá de cuáles fueran sus intenciones. (Perelmiter, 2015: 51)

Este fenómeno excede a quienes ocupan lugares en la estructura estatal, a quienes forman parte de esa “burocracia plebeya”, y se puede filtrar potencialmente también, a través de múltiples mecanismos, en aquellas organizaciones independientes, en la necesidad de gestión y administración de los recursos conquistados.

Como todo proceso, éste contiene repertorios de resistencia y autoafirmación, en los que las organizaciones van especializándose en el enfrentamiento de nuevos problemas, pero asumiendo proyectos colectivos que, en el caso de aquellas que logran mayores niveles de independencia política respecto de los gobiernos de turno, construyen experiencias en las que acumulan organización y amplían la autonomía de clase, creando espacios propicios para fortalecer el poder popular. Sin embargo, para consolidar la construcción de ese otro poder, además de sostener la independencia política, deberán enfrentar también los mecanismos, más sutiles, de la integración y la tendencia a la burocratización de sus propias organizaciones, en tanto se busca que adopten los modelos de gestión y administración estatal.

En los ciclos actuales de lucha, la necesidad de construcción de ese otro poder con vocación antagonista reaparece, por lo que es necesario hacer el balance de estos últimos 20 años de luchas y conquistas. La política social y la lógica de metabolización estatal de la conflictividad tienen límites para contener el progresivo deterioro de las condiciones de vida frente a las múltiples ofensivas que se desprenden del endeudamiento externo, el extractivismo, la reforma laboral y la precarización. Ante esto, la opción a co-gestionar esta crisis, por parte de las organizaciones sociales, en busca de atemperar las consecuencias más brutales del ajuste se convierte en una estrategia limitada y perjudicial para los intereses populares. Stratta y Nicanoff (2019) sostienen que “es necesario comprender que, sin la construcción de relaciones de

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

fuerza diferentes en el seno de la sociedad civil, la política se vuelve sólo administración de lo existente”. Los autores agregan, que “la construcción de poder popular en el territorio, por sí misma, no garantiza posibilidades mayores de transformación y, en el mediano plazo, de no combinarse con otras acciones, aumentan las posibilidades de aislamiento, integración o aniquilamiento” (Stratta y Nicanoff, 2019: 265).

Se desprende entonces otro elemento a tener en cuenta para las luchas por venir. La consolidación de la fuerza propia, de la subjetividad desobediente y antagonista, de las apuestas prefigurativas que muestren, aunque sea en forma embrionaria la posibilidad de otras relaciones sociales, aspectos que son indispensables para construir una perspectiva emancipatoria. Pero, al mismo tiempo, esto debe conectar con la construcción de otra hegemonía, un proyecto integral de transformación de este capitalismo patriarcal, que se construya desde abajo, que revolucione todo lo que deba ser cambiado.

Referencias bibliográficas

Almeyra, Guillermo. (2004). *La protesta social en Argentina*. Buenos Aires: Peña Lillo/Ediciones Continente.

Arcidiácono, Pilar y Bermúdez, Angela. (2018). Del “Ellas Hacen” al “Hacemos futuro”. Descolectivización como impronta de los programas sociales. *Revista de Políticas sociales*. Año 5. N° 6. Verano de 2018. pp. 65-72. Universidad de Moreno.

Arcidiácono, Pilar; Kalpschtrej, Karina y Bermúdez, Ángeles. (2014). ¿Transferencias de ingresos, cooperativismo o trabajo asalariado? El Programa Argentina Trabaja. *Trabajo y Sociedad* [en línea]. 2014, (22), pp. 341-356. ISSN: Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=387334694019>

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Bonnet, Alberto. (Comp.). (2011). *El país invisible. Debates sobre la Argentina reciente*. Buenos Aires: Peña Lillo/Ediciones Continente.

Campos, Luis; Faur, Eleonora y Pautassi, Laura. (2007). Programa familias por la inclusión social. Entre el discurso de derechos y la práctica asistencial. *Colección Investigación y análisis N° 4*. CELS.

Cantamutto, Francisco. (2017). Fases del kirchnerismo: de la ruptura a la afirmación particularista. *Convergencia*, vol. 24, núm. 74, 2017. pp. 63-89. Universidad Autónoma del Estado de México: Facultad de Ciencias Políticas y Administración.

Cotarelo, María Celia e Iñigo Carrera, Nicolás. (2003). La insurrección espontánea, Argentina diciembre 2001. Descripción, periodización, conceptualización. Doc N° 43. En *Publicación del programa de Investigación sobre el Movimiento de la sociedad argentina. Documentos y comunicaciones PIMSA AÑO VII-N° 7*. Documentos de trabajo N° 39 a 43. Buenos Aires.

_____ (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En Caetano G.; López Maya, M. (Comps.) *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*. Buenos Aires: CLACSO

D' Amico, Victoria. (2006). Nuevos planes, viejas políticas. Análisis de los factores políticos y técnicos de la implementación del Seguro de Capacitación y Empleo y el Plan Familias. Tesis de grado de la licenciatura en Sociología. FHCE-UNLP. La Plata. Recuperado de: <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.578/te.578.pdf>

Dinerstein, Ana Cecilia et al. (2013). *Movimientos sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América Latina*. Buenos Aires: Capital intelectual.

Gramsci, Antonio. [1970] (1992). *Antología*. México: Siglo XXI.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Kentikeleni, Alexander y Stubbs, Thomas. (2021). Condicionalidad y deuda soberana. *Revista Derechos en Acción*. Año 6/Nº 18. Verano 2020-2021 (21 diciembre a 20 marzo), Recuperado de: <https://doi.org/10.24215/25251678e478>

Félicz, Mariano. (2011). *Neoliberalismos, neodesarrollismos, y proyectos contrahegemónicos en Suramérica*. Mimeo. Conicet. UNLP.

Marro, Katia. (2011). La organización de los trabajadores desocupados y el enfrentamiento de la cuestión social: ¿Un componente de contrainsurgencia en la política social argentina? En Mallardi, M. et al. (Comps). *Cuestión social, reproducción de la fuerza de trabajo y políticas de asistencia*. pp. 77-106. Carrera de Trabajo Social. UNICEN. Tandil.

_____ (2013). Reflexiones para una comprensión histórico-crítica del movimiento social en sus múltiples dimensiones. *Debates actuales en Trabajo Social I*-Marzo de 2013. Recuperado de: www.catedralibrets.org

Mészáros, István. (2009). *Más allá del Capital. Hacia una teoría de la transición*. Caracas: El Perro y La Rana.

Perelmiter, Luisina. (2015). Burocracia plebeya. La vida íntima del Ministerio de Desarrollo Social. UNSAM: Edita. Recuperado de: <https://www.udesa.edu.ar/sites/default/files/luisinaperelmiter.pdf>

Piva Adrián y Bonnet, Alberto. (Comps). (2009). *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad*. Buenos Aires: Continente

Piva, Adrián (2015). *Economía y política en la Argentina kirchnerista*. Buenos Aires: Batalla de Ideas.

Seiffer, Tamara y Matusevicius, Jorgelina. (2010). Formas de la sobrepoblación relativa y políticas sociales: la política asistencial durante el primer gobierno Kirchnerista (2003-2007), *Revista Razón y Revolución* nº 20. pp. 109-123. Buenos Aires: r y r Ediciones.

Carolina Mamblona - Jorgelina Matusevicius / Política social post 2001 38/66

Stratta, Fernando y Nicanoff, Sergio. (2019). Territorialidad y movimientos sociales. Dispositivos de control, resistencias y saberes de luchas populares. En: Nicanoff, Sergio et al. *Cuadernos de Hegemonía. Resistencia o integración. Dilemas de los movimientos y organizaciones populares de América Latina y Argentina*. pp.229-270. Buenos Aires: Contrahegemonía Web; Herramienta.

Svampa, Maristella. (2011). Argentina, una década después. Del «que se vayan todos» a la exacerbación de lo nacional-popular. *Revista Nueva Sociedad*, N° 235. Septiembre-octubre 2011, pp. 17-34. Recuperado de: www.nuso.org.

Twaites Rey, Mabel. (2013). La bella búsqueda de la autonomía. En: Dinerstein et al. (2013) *Movimientos sociales y autonomía colectiva. La política de la esperanza en América Latina*. pp.9-18. Buenos Aires: Capital intelectual.